CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Los datos que se conocieron en los últimos 3 años sobre la situación de los discapacitados en Bolivia, obligaron al conjunto de los bolivianos a detenerse unos momentos para analizar este sensible asunto y a partir de dichas reflexiones plantear alternativas que beneficien al sector.

Lo evidente es que la discapacidad en el contexto de los países pobres es un asunto extremadamente delicado porque implica hablar de una doble pobreza. La pobreza del sector social como tal, y la pobreza del país en el que se aborda la problemática.

La historia muestra que desde tiempos inmemoriales, los discapacitados han sido objeto de discriminación, maltrato e indiferencia de la sociedad y las propias políticas públicas.

Más allá de sobrellevar el problema de la discapacidad que en sí misma es una limitación que pone en desventaja a unos seres humanos respecto a otros, los discapacitados enfrentan situaciones de marginación de diferente grado, lo cual los llevó a situaciones de empobrecimiento y abandono creciente.

Recién en los últimos años y a raíz de una serie de movilizaciones protagonizadas por el sector, los discapacitados han logrado arrancar La Ley General 233 para Personas con Discapacidad, que es un avance notable en la protección de un conjunto de derechos.

De la situación de absoluta indefensión en la que vivían en el pasado, hoy cuentan con normas jurídicas que protegen sus derechos.

La ley prevé varias medidas sociales favorables al sector, sin embargo, en el ámbito laboral, no se lograron dar los pasos que constituirían un verdadero blindaje para equiparar la igualdad de oportunidades en este ámbito.

La ley prevé medidas protectoras laborales, pero no garantiza que los discapacitados puedan acceder a un cupo de empleos en el sector público, más todavía cuando el Estado boliviano se agrandó notablemente, en función de los nuevos lineamientos gubernamentales.

Aunque la Ley de Discapacidad 233 expresa una serie de argumentos a favor del acceso a las fuentes laborales, en las actuales condiciones nada garantiza que los discapacitados accedan a empleos en el aparato estatal, por tanto se hace necesario plantear una norma que garantice la reserva de cargos públicos para personas con discapacidad, como recurso válido y suficiente para la exigencia real de derechos.

Son muy poco los periodos y los gobiernos que han incorporado la problemática de este sector dentro la agenda de debate público. En la mayoría de los casos, los gobiernos aprobaron apelativos que ayudan a sobrellevar la discapacidad, pero no en el marco de una política integral que los ayude materialmente y que plantee su inclusión efectiva en la vida laboral, educativa y social.

Por lo tanto, es necesario establecer en la propia Constitución Política del Estado boliviano un porcentaje que sea garantía real y efectiva para garantizar el derecho al empleo a los discapacitados de Bolivia.

El planteamiento de la presente investigación tiene su sustento fundamental en la situación de pobreza en la que viven los discapacitados y en los avances sociales que se dieron a nivel internacional en cuanto al

reconocimiento de sus derechos, tanto en el ámbito educativo y cultural como en el laboral.

La investigación está desarrollada en cinco capítulos del siguiente modo:

En el primer capítulo se presenta el tema de investigación a partir de un análisis de contexto y desde su fundamentación y justificación económica, social y jurídica.

En el segundo capítulo se detallan los antecedentes que existen hasta la fecha en el tratamiento de la referida problemática. Ese marco teórico incluye el abordaje que se realizó de la discapacidad en diferentes momentos de la historia.

El tercer capítulo detalla el diseño metodológico elaborado para la presente investigación con sus unidades de análisis, métodos y técnicas establecidos.

En el cuarto capítulo están los resultados de la investigación los que se expresan con gráficos e interpretación de los mismos y también se plantean los fundamentos de la incorporación laboral de los discapacitados.

El último capítulo que lo constituye el quinto, son las conclusiones y recomendaciones a las que se arribaron como resultado de la investigación.